

Septiembre 6 y 7 de 1939

38ª REUNION — 35ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los señores Juan G. Kaiser y Carlos A. Pita

MINISTROS PRESENTES:

del Interior,
Doctor Diógenes Taboada;de Hacienda,
Doctor Pedro Groppo;de Agricultura,
Ingeniero José Padilla;

DIPUTADOS PRESENTES:

Acuña, Aurelio S.
 Aguiar, Henoch D.
 Aguirre Cámara, José
 Agulla, Juan Carlos
 Allperin, Samuel
 Anastasi, Leonidas
 Araujo, Eduardo
 Arbeletche, Aníbal P.
 Arias Uriburu, Juan
 Astesiano, Carmelo I.
 Barrau, José
 Basualdo, Honorio
 Beiró, Angel Francisco
 Beristain, Francisco
 Bertotto, José G.
 Boatti, Ernesto C.
 Boero, Albino
 Busignani, Mario
 Cabral, Humberto
 Cafferata, Juan F.
 Cantilo, José Luis
 Cappellini, Luis E.
 Carús, Agustín J.
 Carreras, Ernesto L. de las
 Castex, I. Mario
 Castro Frediani, Manuel L.
 Cisneros, Carlos E.
 Cooke, Juan I.
 Cordero, Octavio
 Courel, Carlos D.

Damonte Taborda, Raúl
 De Miguel, Benito
 Díaz, Raúl
 Dickmann, Enrique
 Eberlé, Enrique
 Eyto, Francisco F.
 Fassi, Santiago Carlos
 Fazio Rojas, Lorenzo
 Figueroa, Julio A.
 Garona, Juan A.
 Ghioldi, Américo
 Gedoy, Raúl
 Gómez Grandoli, Clemente
 Gómez Rincón, Abel
 González, Benjamín S.
 Grassi, Alfredo
 Grisolia, Luis
 Guerrero, José Rafael
 Guisliamelli, Aquiles M.
 Guillot, Víctor Juan
 Güiraldes, Carlos (h.)
 Gutiérrez, José María
 Hardoy, Emilio J.
 Hernández, Clodomiro
 Horne, Bernardino
 Infante, Faustino
 Iriyoyen, Carlos
 Iriondo, Urbano de
 Izurieta Fourquet, Agustín
 Jaramillo, José María
 Kaiser, Juan G.
 Labayen, Juan
 Lanús, Adolfo
 Lazo, Plácido C.
 Leticia Alvarez, Florencio
 Lima, Vicente Solano
 López, Héctor S.
 López Merito, Ismael
 Maino, Alejandro
 Martínez, Benito E.
 Martínez, F. Benigno
 Martínez, Gregorio N.
 Méndez Calzada, Joaquín
 Montagna, Carlos P.

Moreno, Ricardo A.
 Morrogh Bernard, Juan F.
 Mugica, Adolfo
 Muniagurria, Walter Julio
 Noel, Carlos M.
 Noel, Martín
 O'Reilly, Guillermo R.
 Ortiz Basualdo, Samuel
 Ortiz de Zárate, Miguel
 Osoreo Soler, Manuel E.
 Osorio, Miguel
 Pagano, David J.
 Palacio, Benjamín
 Pandolfo, Pío
 Pastor, Reynaldo A.
 Peco, José
 Peña, Solano
 Pérez, Deolindo
 Piedrabuena, Carmelo P.
 Pinto, Manuel (h.)
 Pita, Carlos A.
 Pizarro, Néstor A.
 Prat Gay, Fernando de
 Quintana, Fenelón
 Radio, Pedro
 Raviemani, Emilio
 Rebetto, Nicolás
 Reyna, Rodolfo
 Rocha, Justo V.
 Ruggieri, Silvio L.
 Saá, Alberto
 Saccone, Romeo D.
 Sammartino, Ernesto
 Sánchez, Adolfo B.
 Schoo Lastra, Dionisio
 Simón Padrós, J.
 Siri, Obdulio F.
 Solá, Juan E.
 Solana, J. Félix
 Solari, Felipe C.
 Solari, Juan Antonio
 Soldano, Arquímedes A. E.
 Solis, Rogelio J.
 Susan, José C.

Tamborini, José P.
 Tapia, Numa
 Teisairé, Eduardo (h.)
 Vásquez, Juan Carlos
 Vélez, Francisco M.
 Videla Dorna, Daniel
 Vilchez, Martín
 Vilgré La Madrid, Juan
 Zara, Edmundo Leopoldo
 Zavala Ortiz, Teobaldo
 Zunino, Marcelo A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

Alsina, Juan José
 Alvarez Colodrero, Carlos
 Amadeo y Videla, Daniel (h.)
 Barriounevo, Gerardo
 Busaniche, Julio A.
 Devoto Acosta, Alcibiades
 Duffy, Eduardo N.
 Ferreira, Antenor R.
 Güerci, José María
 Hernández, Victorio
 Jiménez, Mario
 Martínez, Manuel
 Medina, Justo G.
 Onsari, Fabián
 Paz Posse, Ramón D.
 Peña, Ernesto S.
 Sancerni Giménez, Julián
 Soto, Pedro Numa
 Urien, Enrique César

AUSENTES, CON AVISO:

Paz, Eduardo
 Sáenz, Mario

AUSENTES, SIN AVISO:

Barceló, Alberto
 Biancofiore, Rafael
 Illanes, Eloy J.
 López García, Francisco

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicación del Honorable Senado.
- II.—Comunicación oficial.

III.—Peticiónes particulares.

- IV.—Proyecto de ley del señor diputado Beiró y otros, declarando de utilidad pública las manzanas comprendidas entre las calles Francisco Beiró, Lope de Vega, Ramón Lista y Molière.

V.—Proyecto de ley de los señores diputados

Cooke y Alsina, sobre subsidio al **Círculo Cultural Berissense**.

- VI.—Proyecto de ley de los señores diputados **Zara y Saá**, sobre pensión a la señora **Hortensia Gibbs de Evans** y señorita **María Esther del Socorro Evans**.
- VII.—Proyecto de ley del señor diputado **Aguirre Cámara** y otros, sobre identificación de aceites.
- VIII.—Proyecto de ley del señor diputado **Guillot**, sobre pensión a las señoritas **María Sixta R.**, **María Otilia P.** y **María Zulema S. Zapata**.
- IX.—Proyecto de ley del señor diputado **Radio**, sobre pensión a la señora **Sara Albariño de Roballos**.
- X.—Proyecto de ley del señor diputado **Noel (C. M.)**, sobre pensión a la señora **María Esther Campos de Martínez**.
- 4.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones, a los señores diputados **Martínez (G. N.)**, **Güerci**, **Jiménez** y **Hernández (V.)**.
- 5.—Indicación del señor diputado **Dickmann**, para que se inserten en el **Diario de Sesiones** los informes remitidos por el **Poder Ejecutivo**, sobre provisión de agua a varias poblaciones del territorio de **Santa Cruz**. Es aprobada.
- 6.—Moción del señor diputado **Pandolfo**, modificada por el señor diputado **Ravignani**, para continuar tratando el despacho sobre colonización y fijando la hora 17 y 30 para considerar el despacho de la **Comisión de Legislación General**, sobre represión del alza injustificada de los precios de los artículos de primera necesidad. Es aprobada.
- 7.—Indicaciones: del señor diputado **Barrau**, para que se incluya en el plan de trabajo los despachos de la **Comisión de Legislación General**, sobre reglamentación de la profesión de contador público nacional y de validez de títulos provinciales de contador; y del señor diputado **Pandolfo**, para que el primer asunto pase también a la **Comisión de Instrucción Pública**. Es aprobada esta última.
- 8.—Mociones: del señor diputado **Saccone** para que se considere sobre tablas el despacho sobre el proyecto de ley de amnistía; y del señor diputado **Lazo**, para que se pase a la orden del día. Es aprobada esta última.
- 9.—Continúa la consideración del despacho de la **Comisión de Legislación Agraria**, sobre creación del consejo nacional de colonización.
- 10.—Se considera el despacho de la **Comisión de Legislación General**, sobre represión del alza injustificada de los precios de los artículos de primera necesidad.
- 11.—Indicación del señor diputado **Godoy**, para que se dé entrada al mensaje y proyecto de ley del

Poder Ejecutivo, a que se refiere el número siguiente, y se destine a la **Comisión de Presupuesto y Hacienda**. Es aprobada.

12.—Asunto entrado:

XI.—Mensaje y proyecto de ley del **Poder Ejecutivo**, por el que se declara en vigencia para el año 1940 el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos del corriente año.

13.—Termina la consideración del asunto a que se refiere el número 10.

—En Buenos Aires, a seis días del mes de septiembre del año 1939, siendo la hora 15 y 29:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Allperín. — Señor presidente: hago indicación de que se continúe llamando hasta la hora 16.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Habiendo asentimiento, se continuará llamando.

Sr. Cafferata. — ¿Cuántos diputados hay en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Kaiser). — En la casa hay 99 señores diputados.

—Se continúa llamando.

2

ACTA

—A la hora 15 y 55:

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda abierta la sesión con 87 señores diputados en el recinto.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado **Sánchez**, se suprime la lectura, y se da por aprobada el acta.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Comunicación del Honorable Senado

INFORMANDO:

Que ha designado presidente de la Nación para el caso de acefalía, al señor senador **Patrón Costas**. (*Al archivo.*)

Sr. Barrau.—No me opongo. Tanto es así, que voy a modificar mi pedido de preferencia en el sentido de que los dos despachos se traten en la misma sesión, aunque uno es reglamentar una profesión, y el otro es dar validez nacional a títulos de contadores otorgados en las provincias.

Sr. Pandolfo. — Pido la palabra.

En el curso de esta discusión, que yo no quería que se produjese porque preveía esto que está ocurriendo, y es que estamos perdiendo lamentablemente el tiempo...

Sr. Barrau. — No se pierde; se gana.

Sr. Pandolfo. — En mi concepto, lo perdemos.

El señor diputado Mugica me preguntaba qué razones tenía para pedir que el despacho pase también a la Comisión de Instrucción Pública, y creo que debo dárselo con toda brevedad. Por la simple lectura de las órdenes del día que contienen los despachos sobre títulos y profesión de contadores, se apreciará objetivamente que se crea el campo en el cual, por el artículo 60 del reglamento, debe actuar la comisión a que me he referido. Es posible que estos proyectos debieran ser estudiados por las dos comisiones en conjunto, pero como ello no se ha hecho, estimo que la solicitud de un miembro de la comisión bastaría para que la Cámara hiciera girar esos asuntos a su seno, en una legítima reciprocidad hacia ella que, en otros casos, por ejemplo en el despacho del proyecto de ley de la protección a la infancia, no manifestó ningún inconveniente en que fuera girado, no solamente a la de Presupuesto sino también a la de Higiene y Asistencia Social, por la sola indicación de un señor diputado.

Como habrá observado la Honorable Cámara con las precisas y muy bien dichas palabras pronunciadas por el señor diputado Courel, se trata de un asunto complejo, que afecta, en mi concepto, los privilegios de la ley Avellaneda, razón por la cual la Honorable Cámara debe aceptar la indicación que formulo.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar si el despacho número 178 pasa a la Comisión de Instrucción Pública.

—Resulta afirmativa.

8

MOCION

Sr. Saccone. — Pido la palabra.

Hace más o menos dos meses, con motivo del rechazo de una moción de tratar sobre tablas el proyecto de ley de amnistía, yo anun-

cié que en cada sesión siguiente repetiría mi moción.

He sido desleal con mi palabra. No la he cumplido y acuso mi deslealtad. Pero he tenido un atenuante, porque según informaciones particulares que tenía, la comisión iba a producir despacho y en el deseo de que tuviésemos esa ley de amnistía no quise perjudicar con nuevas mociones de preferencia la obra de la comisión, que hubiera sido salvadora.

Ahora, ante la circunstancia de que la comisión no ha despachado aún el proyecto y estando ya próximo a su terminación el período parlamentario, siento el deber moral de repetir mi moción y como no deseo interrumpir mayormente la sesión de hoy, no diré absolutamente nada en favor de mi proyecto y, concretamente, haré moción de que con o sin despacho de comisión se trate el asunto a que me refiero, el martes próximo.

Sr. Lazo. — Pido la palabra.

Al iniciarse la sesión, la Honorable Cámara resolvió entrar a considerar el despacho sobre colonización hasta las 17 y 30 horas. Ahora, como se están interpolando otros asuntos, voy a hacer una moción concreta, aunque sea una redundancia: la de que pasemos a la orden del día.

Sr. Saccone. — Perfectamente; si se acepta esa moción, formularé la mía mañana y todos los días.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar la moción de pasar a la orden del día.

—Se vota, y resulta afirmativa.

9

COLONIZACION NACIONAL

Sr. Presidente (Kaiser). — Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Legislación Agraria, sobre colonización.

—En discusión el artículo 35 del despacho, que pasa a ser 36.

Sr. Secretario (González Bonorino). — El señor diputado Allperín propone que se modifique la segunda parte del artículo, en la siguiente forma: «Los miembros de los consejos agrarios serán elegidos por el consejo agrario nacional, ejerciendo la presidencia el gerente del Banco de la Nación o el agrónomo regional, o el presidente de la cooperativa de la sociedad rural, en caso de existir en la zona donde se establezca, o en su defecto, el pro-

ductor que el consejo agrario nacional determine».

Sr. Allperín. — Como ha visto la Honorable Cámara, no se propone una modificación fundamental. Simplemente se trata de incluir entre las instituciones cuyos representantes formen el consejo agrario, a las sociedades rurales, por cuanto no son, precisamente, las cooperativas las que abundan en los territorios del Sur. Los auténticos productores y ganaderos se agrupan en esta clase de organizaciones, que llenan las mismas finalidades que las cooperativas en la defensa de los intereses de la zona.

Sr. Presidente (Kaiser). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Horne. — La comisión no acepta el agregado, por una razón sencilla. Está perfectamente determinado quién va a ejercer la presidencia del consejo agrario: el presidente del Banco de la Nación, el agrónomo regional, el gerente de la cooperativa, o el productor que designe el consejo agrario nacional. Las sociedades rurales no tienen nada que hacer, en este problema.

Sr. Allperín. — ¿En las zonas de los territorios no tienen nada que hacer?

Sr. Horne. — En este problema no tienen nada que hacer.

Por otra parte, de acuerdo con esta ley, aun suponiendo que no existiera gerente de banco o agrónomos regionales, en todo caso deben crearse cooperativas en las colonias oficiales a fundarse, siendo los gerentes de las cooperativas los hombres más indicados para presidir estos consejos agrarios.

Por las características que tendrán las cooperativas, vinculadas estrechamente a las tareas del colono, me parece que se excluye la intervención de todo otro factor.

Por estas breves consideraciones, la comisión pide que se vote el despacho.

Sr. Allperín. — Las cooperativas, señor diputado, llenan la misión de defensa de los productores. Las sociedades rurales de la Patagonia tienen esa misma finalidad: interesarse por todos los problemas que se relacionan con la producción agraria de la zona. Allí no hay productores ni asociados de clase.

Sr. Susan. — Pido la palabra.

Voy a proponer una modificación. Reemplazar las palabras «los principales productores» por «las personas responsables».

Los principales productores tienen un concepto particular de estos problemas y yo entiendo que podrían llenar esas funciones agricultores

u otras personas capacitadas, sin ser principales productores.

Sr. Allperín. — La modificación que he propuesto, señor diputado, contempla esa situación.

Sr. Horne. — Aceptando el concepto, podría ponerse en lugar de «los principales productores», «los mejores productores».

Sr. Susan. — Quizá está dentro del concepto que he expresado.

Sr. Horne. — La comisión acepta en esa forma.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el despacho de la comisión con la modificación a que acaba de referirse el señor diputado Horne.

Sr. Allperín. — Solicito que se vote por partes, porque yo he propuesto la modificación de la segunda parte, modificación en la que está contemplado, también, lo propuesto por el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar por partes, como pide el señor diputado por Buenos Aires.

Se va a votar el primer párrafo.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el segundo párrafo, con la modificación propuesta por el señor diputado por Entre Ríos, que consiste en la palabra «mejores» en lugar de «principales».

Sr. Solana. — Hay otra modificación que ha sido propuesta por el señor diputado Allperín.

Sr. Presidente (Kaiser). — No ha sido aceptada por la comisión.

Sr. Solana. — Vamos a insistir ante la comisión a fin de que acepte por las razones expuestas.

Sr. Presidente (Kaiser). — La comisión no la ha aceptado.

Si la Cámara rechaza la redacción del despacho, la Presidencia pondrá a votación la redacción propuesta por el señor diputado por Buenos Aires.

Se va a votar el párrafo con la redacción dada por la comisión.

—Es aprobado.

—En consideración el artículo 36, ahora 37.

Sr. Horne. — Pido que inciso que no se observe, se dé por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se votará en esa forma.

—Sin observación, se aprueba el artículo 36, ahora 37.

Sr. Susan. — Pido la palabra.

Con referencia al artículo anterior. propongo un agregado.

Como estos consejos agrarios tendrán una función interesante y compleja de colaboración, vigilancia, propaganda y hasta de arbitraje, ¿no sería posible autorizarlos a disponer de las cantidades necesarias para gastos a los efectos del mejor desempeño de su función?

Sr. Palacio. — No, señor diputado, porque estos consejos son ad honórem.

Sr. Susan. — Estoy de acuerdo, pero en las funciones de propaganda, vigilancia, etcétera, tendrán que trasladarse a distintos lugares y ello irrogará gastos.

Sr. Palacio. — La propaganda y la acción la desarrollará el consejo central, que sólo podrá emplear fondos a ese efecto, en los casos necesarios.

—Sin observación, se aprueban los artículos 37, ahora 38; y 38, ahora 39.

—En consideración el artículo 39, ahora 40.

Sr. Palacio. — Hay un error en este artículo. En lugar de artículo 39 debe decir 38.

Sr. Ravignani. — Además, yo haría indicación de que en la parte donde dice: «a nombre del comprador o arrendatario y a la orden del consejo», se agregue la palabra «colocadas», antes de «títulos nacionales». Además, propongo se diga a continuación de: «Los intereses de estas sumas tendrán el mismo destino», se agregue: «que el capital».

Sr. Palacio. — La comisión acepta.

Sr. Ravignani. — Quedaría así: «Las sumas que se abonen en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 (ahora 38), se depositarán en el Banco de la Nación Argentina a nombre del comprador o arrendatario y a la orden del consejo, colocadas en títulos nacionales. Los intereses de estas sumas tendrán el mismo destino que el capital.»

Sr. Horne. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar, en la forma aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

—En consideración el artículo 40, ahora 41.

—Sin observación, se aprueban los apartados a) y b).

—En consideración el apartado c).

Sr. Palacio. — En el inciso c) de este artículo, debe substituirse la palabra «exceda» por la palabra «alcance», quedando así: «Solamente cuando el fondo de ahorro alcance al 10 % del precio de venta, el excedente se destinará a amortizar su saldo.»

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar en la forma propuesta por la comisión.

—Resulta afirmativa.

—En consideración el artículo 41, ahora 42.

Sr. Palacio. — Debe corregirse donde dice artículo 28, pues debe decir «artículo 29».

—Sin observación, se aprueba el artículo 41, ahora 42, con la corrección indicada.

—En consideración el artículo 42, ahora 43.

Sr. Ravignani. — Debe hacerse igual corrección. Donde dice «29» debe asentarse «30».

Sr. Presidente (Kaiser). — Ya lo ha corregido la Secretaría.

Sr. Palacio. — El artículo en consideración debe votarse suprimiendo la última parte que dice: «y el consejo aplicará el saldo que resultare para amortización de su deuda». Esto es innecesario porque en la primera parte del artículo se establece que una vez hecha la transferencia el comprador no continuará acumulando para el fondo de ahorro.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo con la supresión propuesta.

—Se vota y aprueba, en la siguiente forma:

Artículo 43. — Una vez efectuada la transferencia a que se refiere el artículo 30, cesará la obligación del comprador de contribuir a formar el fondo de ahorro.

—En consideración el artículo 43, ahora 44.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

Sugiero a la comisión que en el inciso a) se agregue la palabra «personalmente», proposición que hace el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos en el memorial que ha elevado a la Cámara.

Sr. Horne. — No habría inconveniente.

Sr. Dickmann. — Me parece que no debe agregarse la palabra propuesta. Si el agricultor está inhabilitado para el trabajo, puede trabajar la familia.

Sr. Palacio. — El concepto es que la familia resida en el predio.

Sr. Horne. — Y lo trabaje.

Sr. Anastasi. — Entonces la comisión tendrá que modificar también el artículo 47.

Sr. Palacio. — Debe votarse el artículo como está, porque podría presentarse el caso que indica el señor diputado Dickmann.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el despacho.

—Sin observación, se aprueba el artículo 43, ahora 44.

—En consideración el artículo 44, que pasa a ser 45.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Creo que la comisión aceptará que donde dice: «dos tercios», se ponga «cuatro quintos». El propósito es que la resolución se adopte por una gran mayoría.

Sr. Palacio. — La comisión acepta.

Sr. Horne. — Concordando con una resolución anterior.

Sr. Susan. — Pido la palabra.

Ayer propusimos un agregado a uno de los artículos anteriores, respecto al plazo que se daba para el desalojo del campo. Este artículo viene a dar la razón a lo que sosteníamos ayer. Precisamente se establece en el último párrafo del artículo en consideración lo siguiente: «El comprador tendrá un plazo máximo de seis meses para desalojar y el arrendatario un plazo mínimo de sesenta días, previo informe del consejo local». Yo entiendo que no debe existir esta diferencia de tiempo. Las razones que aducíamos ayer vuelven a aparecer en este momento. Hay algunas situaciones en que no se puede desalojar al colono; por ejemplo, cuando ha sembrado debe dársele tiempo necesario para que pueda recoger su cosecha. De modo que es preferible establecer un plazo único de seis meses, para que pueda cosechar y luego retirarse del campo.

Sr. Palacio. — ¿Qué es lo que propone concretamente, señor diputado?

Sr. Susan. — Que se establezca igual plazo al arrendatario que al comprador, para desalojar el campo: seis meses.

Sr. Palacio. — Las situaciones son completamente distintas. Los plazos que se acuerdan

por este artículo son para hacer efectiva la medida resuelta. El artículo en el que quería hacer anteriormente una modificación el señor diputado, se refería al plazo que debe tener el consejo creado por esta ley para disponer el desalojo. Este artículo se refiere al desalojo ya resuelto, por falta de cumplimiento del contrato y a los plazos indispensables para que el desalojado abandone materialmente el predio. De manera que no hay contradicción entre los dos artículos.

Sr. Susan. — Me parece que es un agregado práctico el que propongo.

Sr. Palacio. — Está fuera del concepto de la ley.

Sr. Susan. — ¿Por qué razón a uno se le acuerdan seis meses y a otro sólo dos?

Hago notar que he propuesto diversos agregados a esta ley, sugeridos por la práctica y por el conocimiento profundo que tengo de estas cuestiones; además, me he valido en muchos casos del asesoramiento de gente entendida en la materia. Pero parece que la comisión tomara con excesivo amor propio su despacho, dada la resistencia a admitir las modificaciones que propongo. Se aferra a su despacho, sin tener siquiera la tolerancia que naturalmente debe existir en estas cosas.

Es un asunto práctico: si en un caso se tolera que el agricultor pueda permanecer seis meses, no sé por qué en el otro caso similar no se admite que pueda quedar también seis meses.

—Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 1º, don Carlos A. Pita.

Sr. Infante. — Pido la palabra.

La razón está, señor diputado, en que en un caso se trata sencillamente de un arrendatario que deja de serlo o en el de una persona que no ha demostrado tener las condiciones indispensables.

Sr. Susan. — ¿Y la cosecha en qué condiciones queda? ¿Quién la trabaja?

Sr. Infante. — Aun en el caso de que esa persona no hubiera demostrado condiciones, a pesar de todo eso, el plazo de sesenta días es insuficiente. La ley general establece plazos mayores y no habría motivo ninguno para que, si bien se acortara el plazo en lo que se refiere al que no ha demostrado condiciones que la misma ley requiere para convertirlo en arrendatario, se otorgara en este caso un plazo más extenso que el de sesenta días, a todas luces demasiado breve.

Sr. Susan. — Es lo que pido: un plazo más extenso para éstos.

Sr. Horne. — Lo que quiere el señor diputado por Santa Fe es evitar que, en un caso extraordinario que puede plantearse hipotéticamente, el colono no pierda su cosecha. Este artículo es para los casos normales que establece la ley fijando el término de sesenta días para el desalojo; pero es evidente que el consejo tendrá que considerar a los colonos que tengan cosecha, dentro de las normas especiales que hay en materia de arrendamientos, porque no va a hacer un despojo. Lo que no quiere es colocar en un pie de igualdad al que tiene promesa de venta y al arrendatario, haciendo más terminantes las condiciones para la rescisión del contrato de los primeros.

Con esta aclaración que hace la comisión, creo que el señor diputado estará satisfecho.

Sr. Presidente (Pita). — ¿La comisión no acepta la proposición del señor diputado?

Sr. Horne. — No, señor presidente.

La modificación propuesta por el señor diputado por la Capital, doctor Guillot, se acepta correlacionándola con la disposición anterior, o sea con la que dispone el quórum de cuatro miembros.

Sr. Presidente (Pita). — Ya la Secretaría ha tomado nota.

—Se llama para votar.

Sr. Repetto. — Se podrían cerrar las puertas del recinto, si no hubiera quórum; es un procedimiento que se ha aplicado en muchos casos.

Sr. Presidente (Pita). — Si hubiera asentimiento, así se hará.

Se va a votar el artículo, con la modificación propuesta por el señor diputado por la Capital y aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Guillot. — Convendría advertir a los señores diputados que acaban de entrar al recinto y que no conocen la resolución de la Honorable Cámara, por la que se clausurarán las puertas. Hago esta notificación para evitar situaciones violentas.

Sr. Lazo. — ¿Hay una moción en ese sentido?

Varios señores diputados. — No se ha votado.

Sr. Presidente (Pita). — El señor diputado por la Capital, doctor Repetto, hizo la indica-

ción y la Presidencia manifestó que si había asentimiento...

Sr. Basualdo. — Debe ponerse a votación.

Sr. Repetto. — En realidad, no he propuesto en serio la medida. Me he limitado a decir que podrían cerrarse las puertas.

Sr. Presidente (Pita). — La Presidencia tomó la indicación, en la única forma en que podía hacerlo.

En consideración el artículo 45, ahora 46.

—Se lee:

Artículo 45, ahora 46. — Queda facultado el consejo a proceder, sin forma alguna de juicio, al embargo hasta el 33 % de la renta bruta de cada predio para aplicarla al pago de las anualidades a que se refieren los artículos 29 y 32.

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

Sobre la mesa del señor presidente de la comisión existe una proposición formulada en el sentido de establecer la previa notificación, antes del embargo del 33 % de la renta. Se trata de suavizar la rigidez de este artículo y creo que la comisión encontrará aceptable la enmienda.

Sr. Palacio. — La comisión necesitaría que se aclarara el sentido de la modificación, porque es de la esencia de todo embargo, que el deudor no lo conozca con anticipación, ya que con una notificación previa se dificultaría hacer efectiva la garantía.

Con respecto al otro agregado que propone el señor diputado, la comisión necesitaría saber para qué sería el plazo prudencial que se indica.

Sr. Pinto (h.). — Mis proposiciones se refieren a los artículos 45 y 46. El que trata del embargo hasta el 33 % debe entenderse por embargo de la producción. El embargo se ha de realizar sin forma alguna de juicio y entendía que previamente a esa medida drástica podría notificarse al colono el cobro, sin que hubiera, en manera alguna, peligro para la garantía. El consejo tiene en sus manos una serie de formas para evitar que la garantía desaparezca.

Sr. Horne. — Puede prenderla.

Sr. Pinto (h.). — Es a la producción.

Sr. Horne. — Precisamente: la producción.

Sr. Pinto (h.). — No se puede pensar que una notificación permita a los tres días que el deudor establezca prenda sobre la producción...

Sr. Horne. — Una hora bastaría.

Sr. Palacio. — El artículo no tiene otra finalidad que el consejo que ha vendido el inmueble

y que se encuentra en presencia de un colono con opción a compra, que no hace el depósito de la cuota que debe entregar para quedar como propietario, pueda garantizarse mediante este embargo.

Sr. Anastasi. — Siempre tiene privilegio sobre el precio de venta.

Sr. Barrau. — Pido la palabra.

Voy a apoyar la indicación del diputado por la Capital, señor Pinto, porque la considero perfectamente pertinente. El embargo, en la forma en que viene proyectado por la comisión, será nominal. Es una disposición que tomará el consejo: la hará notificar al deudor que embarga, pero este hecho no va a impedir que el arrendatario o dueño de la tierra venda su producción. Hay que dar alguna garantía. ¿Dónde se va a anotar?

Voy a ampliar la indicación del señor diputado para que este embargo se realice conforme a las prescripciones de la ley de prenda agraria, número 9.644, o sea, para que este embargo a que el consejo está facultado en su traba, tenga anotación en el Registro Agrícola (ganadero, creado por la ley nacional de prenda agraria, pues, de lo contrario, será un embargo ilusorio. Por eso, ampliando la indicación del señor diputado por la Capital, sería oportuno disponer que los embargos se anotarán en el registro agrario a que se refiere la ley número 9.644.

El artículo 45 de la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional, que es una ley de excepción, acuerda el privilegio al banco de embargar la producción del bien gravado en caso de mora. El banco se encontró con dificultades para hacer efectivo ese derecho y se subsanó el inconveniente mediante un procedimiento análogo al que sugiero en este caso.

Sr. Labayen. — El embargo que autoriza el artículo que estamos considerando, tiene un sentido particular, y no puede regirse por las disposiciones correspondientes a los embargos comunes. En este caso, el embargo se establece en beneficio del propio colono y no de terceros; se le va embargar para obligarle a pagar lo que debe por la tierra que va a ser suya. Es, pues, un ahorro casi obligatorio, y de esa manera se evita que los terceros puedan dificultarle el pago de la tierra. Aparentemente, es una medida rigurosa, pero en realidad, es en beneficio directo del propio embargado.

Con respecto a los resguardos para el embargo, como anotaciones en el registro y demás, debo hacerle presente al señor diputado, que no habría otra forma práctica para realizar el embargo de una cosa mueble. Lo más práctico

será que el consejo agrario, al tiempo de embargar, nombre un depositario, lo ponga en posesión de la cosa y no le permita transferirla a nadie. No debe olvidar el señor diputado que la propiedad de las cosas muebles se transfiere por la simple posesión. Da manera que el artículo está bien redactado y la comisión lo mantiene.

Sr. Barrau. — No será la mejor solución, porque el nombramiento de un depositario de las cosas embargadas irrogará gastos que redundarán en perjuicio del colono.

Sr. Labayen. — El consejo agrario tendrá funcionarios especiales a quienes encomendará esas funciones.

Sr. Horne. — Por otra parte, el embargo de cosas muebles no se anota en ningún registro. De manera que sería una medida excesiva tratándose de algo que se hace en favor del propio colono, como ha dicho bien el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Barrau. — No es una medida excesiva, y, por otra parte, la propongo en resguardo del colono, de terceros y del propio consejo agrario. Pero si la comisión no lo entiende así...

Sr. Presidente (Pita). — ¿La comisión insiste en no aceptar los agregados?

Sr. Palacio. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Ravignani. — En el artículo en discusión se hace referencia a otros artículos que hay que concordar con la nueva numeración.

Sr. Presidente (Pita). — Sí, señor diputado.

Sr. Anastasi. — ¿Y el agregado que ha propuesto el señor diputado por la Capital, doctor Barrau, que se refiere al registro donde debe inscribirse el embargo?

Sr. Horne. — Ya hemos expresado que en materia de muebles no hay inscripción de embargos. Lo que se va a embargar es la cosecha.

Sr. Barrau. — El señor diputado olvida la ley número 9.644, sobre prenda agraria, que los autoriza.

Sr. Horne. — Es una ley especial, señor diputado.

Sr. Barrau. — Pero se inscriben. Hay un registro especial, agricolaganadero, en el Ministerio de Agricultura.

Sr. Anastasi. — De lo contrario, ¿cómo los conocerían los terceros?

Sr. Labayen. — ¿Qué terceros?

Sr. Anastasi. — Cualquier tercero. El embargo es una medida de seguridad que debe hacerse pública. De lo contrario, perjudicaríamos el mismo crédito del colono.

Sr. Labayen. — Yo voy a preguntar al señor diputado una sola cosa: ¿la cosecha embargada por el consejo agrario, podría correr peligro si se estableciera sobre ella una prenda?

El colono propietario de esa cosecha podría preñar la misma a una tercera persona, no obstante estar embargada por el consejo agrario. ¿Pero, acaso no se podría pedir la nulidad de esa prenda, probando que la cosecha estaba embargada antes por el consejo agrario?

Sr. Anastasi. — Eso importaría la comisión de un delito.

Sr. Labayen. — Un delito para el colono, pero a mí no me parece que corra ningún peligro el derecho del consejo agrario.

Sr. Anastasi. — Inscribir los embargos en el Registro de Prenda Agraria, no costaría nada.

Sr. Palacio. — Los embargos se harán por intermedio del juez de paz respectivo. Es un hecho público perfectamente verificable.

Sr. Anastasi. — El consejo por su cuenta decreta el embargo, es evidente. Pero lo que nosotros perseguimos, es que ese hecho llegue al conocimiento de los terceros y precisamente, en la hipótesis que planteaba el señor diputado por Entre Ríos, se trata de evitar que pueda constituirse una prenda agraria sobre la cosecha embargada.

Sr. Zara. — La publicidad es en beneficio evidente del colono y de todos.

Sr. Anastasi. — No hay duda.

Por otra parte, el agregado del señor diputado Barrau, es muy sencillo: debiendo anotarse el embargo en el Registro de Prenda Agraria.

Sr. Palacio. — En el Registro de Prenda Agraria, que a tal efecto abrirá un registro especial.

La comisión acepta el agregado.

Sr. Presidente (Pita). — La Secretaría procederá a leer la redacción definitiva del artículo.

Sr. Secretario (González Bonorino). — El artículo 45, ahora 46, con el agregado aceptado por la comisión, quedaría en la siguiente forma:

Artículo 46. — Queda facultado el consejo a proceder sin forma alguna de juicio al embargo hasta el 33 % de la renta bruta de cada predio, para aplicarla al pago de las anualidades a que se refieren los artículos 29 y 32. Los embargos se anotarán en el Registro Agrícola Ganadero de la Nación. (Ley número 9.644).

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— En discusión el artículo 46, que pasa a ser 47.

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

Sobre este artículo también he entregado a la comisión una proposición tendente a quitarle el aspecto un tanto rígido que tiene, sin ninguna defensa procesal para el colono. Ni siquiera el artículo se ha ajustado a los términos de las disposiciones similares de la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional, ley número 8.172, que en su artículo 58 acuerda un plazo de noventa días en caso de remate ordenado por el directorio del Banco Hipotecario, y que más tarde modificó en el mismo sentido la ley número 10.676.

Estimo que la comisión no tendrá ningún reparo que hacer a este agregado. Se trata de suavizar el texto legal, de quitarle este aspecto antipático, de que sea sin forma alguna de juicio, es decir, que haya alguna defensa para el colono en sus reclamaciones, dentro del mecanismo de la ley. Y me ajusto en eso al modelo que debe haber tenido a la vista la comisión; la ley del Banco Hipotecario Nacional.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

La comisión acepta la proposición del señor diputado por la Capital. Este caso es distinto del que contempla el artículo anterior: tratándose de la venta, puede darse el plazo que propone el señor diputado.

Por otra parte, voy a proponer en nombre de la comisión que se agregue al final lo siguiente: «El remate debe ser aprobado por el consejo».

Explicaré brevemente la razón de este agregado. La ley tiene por objeto que sean agricultores calificados los que vayan a realizar la colonización. Es indudable que el lote vendido no podría caer en manos de cualquier agricultor, sino en la de los agricultores que contempla la ley. Por ese motivo conviene que el remate tenga que ser aprobado por el consejo, a fin de evitar que el inmueble pase a manos de un agricultor que no convenga a los fines que se proyectan.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

No he querido continuar interviniendo en la discusión en particular de esta ley, porque he notado la ineficacia de nuestros esfuerzos para mejorarla; pero no puedo dejar pasar en silencio este artículo.

Sr. Labayen. — Discúlpeme, señor diputado. Sus palabras importan un cargo a la Comisión de Legislación Agraria, que me parece es injusto. Dice el señor diputado que no ha intervenido en la discusión porque ha notado la ineficacia de su esfuerzo para mejorar la ley.

Hemos aceptado muchas iniciativas, todas las que hemos creído convenientes. El señor diputado no ha intervenido porque habrá tenido cualquier otra razón, pero no porque resultara ineficaz su intervención. Repito que es un cargo injusto, y no podemos aceptarlo.

Sr. Fassi. — Voy a explicar mi pensamiento en forma clara. No hay ningún cargo contra la comisión. He dicho en una de mis últimas intervenciones en la discusión en particular, que buena parte de los diputados, que con su voto deben decidir sobre las modificaciones propuestas, concurren al recinto en el momento de votar y se encuentran sin elementos de juicio para saber si es la comisión o si es el diputado que ha hablado quien sostiene la buena doctrina.

Por otra parte, y sin que esto signifique un cargo, sostendré que la comisión no ha aceptado algunas modificaciones que sin atentar contra la armonía del proyecto lo mejoraban visiblemente. La mayor parte de las modificaciones que ha aceptado son de simples términos, cuando hay otras más fundamentales y más importantes que, a mi juicio, debió aceptar.

Voy a demostrarlo con este mismo artículo 46. Entiendo que si se le adjudica un lote a un colono y éste no cumple sus obligaciones en cuanto al pago, lo natural es que se rescinda el contrato y el lote ingrese de nuevo a poder del consejo agrario, para que lo adjudique en las mismas condiciones de la primera operación.

Esto me parece tan simple y sencillo que no necesita mayores fundamentos. El colono no procede dentro de su lote con absoluta independencia: está sometido a determinadas normas de explotación, a distintas formas de coordinación de su trabajo con los demás colonos; a obligaciones respecto a la cooperativa, etcétera. Si se realiza un remate público, ¿cómo pueden conciliarse todas esas obligaciones con esa situación en que, en definitiva, según la modificación que acepta la comisión, sólo se permite que intervenga el consejo agrario a los efectos de aprobar la adjudicación? Más natural es que el lote retorne al consejo agrario, que se rescinda el contrato y que se adjudique a otro colono que lo pague de acuerdo a las reglas generales del despacho.

Este criterio mío es robustecido por la circunstancia de que se trata de un artículo colocado dentro de un capítulo que se refiere a la rescisión de contratos.

Por lo tanto, y sin dar mayores fundamen-

tos, voy a proponer que en reemplazo de la venta del predio se disponga la rescisión del contrato y el retorno del predio al consejo agrario nacional para que proceda a una nueva adjudicación.

Sr. Palacio. — ¿Cómo lo propone?

Sr. Fassi. — «Queda facultado el consejo agrario a proceder a la rescisión del contrato, si el comprador no hubiera abonado las anualidades a que se refiere el artículo 28.»

Sr. Iriondo. — ¿Cualquier número de anualidades? ¿La rescisión importaría la pérdida de esas anualidades?

Sr. Fassi. — La rescisión significa que el contrato queda sin efecto. Pero hay una disposición que establece que ha de devolverse lo que ha pagado.

Sr. Guillot. — Yo le preguntaría si esta innovación a introducirse en el texto de una ley ya coordinada, no afectaría otras disposiciones de la misma.

Sr. Fassi. — He estudiado este proyecto con todo cariño, con el mismo cariño con que lo ha despachado la comisión, y no encuentro que mi proposición afecte el articulado del proyecto.

Sr. Guillot. — Me basta la afirmación del señor diputado.

Sr. Palacio. — Lo que propone el señor diputado contempla la situación que prevé el artículo 46, desde un punto de vista distinto.

El artículo de la comisión, parte de la base de que el colono a quien se le ha transferido el predio no pague las anualidades a que se ha obligado, y entonces el consejo termina con esa situación poniendo en venta el inmueble para que lo adquiera un tercero y continúe con las obligaciones que no ha podido cumplir el comprador originario. La proposición del señor diputado consiste en que, en lugar de que el inmueble pase a un tercero en virtud del remate, vuelva nuevamente al consejo para que él disponga de esta tierra en las mismas condiciones dentro del régimen de la ley. Los fines que se persiguen con las dos disposiciones son los mismos.

—El señor diputado Fassi pronuncia unas palabras que no se alcanzan a percibir.

Sr. Presidente (Pita). — Ruego a los señores diputados se dirijan a la Presidencia.

Sr. Palacio. — De modo que podría aceptarse la modificación propuesta por el señor diputado. Pero yo quiero hacer presente a la Cámara que la finalidad de la ley se cumple.

sea que se vote el artículo como lo ha redactado la comisión, sea que se aceptara la proposición del señor diputado.

Sr. Barrionuevo. — Se economizan los gastos del remate.

Sr. Solana. — Mejor se cumple la finalidad en esta forma.

Sr. Horne. — Pido la palabra.

En primer lugar, debo decir que el diputado por la Capital, a pesar de que ha aclarado el concepto con relación a la propuesta hecha con anterioridad, no tiene razón, porque yo he pedido en una sesión anterior que todas estas modificaciones sean presentadas a la comisión para que ella tenga el tiempo necesario de estudiarlas y no se improvise en el debate.

—El señor diputado Fassi pronuncia unas palabras que no se alcanzan a percibir.

En cualquier forma, creo que en estas circunstancias el señor diputado por la Capital tiene razón. Creo que el artículo 46 no debiera establecer el remate público. La única razón que habría en establecer el remate público sería la garantía del precio para el dueño o titular del derecho de la tierra que se va a enajenar por no haber cumplido los requisitos de la ley. Pero como en el artículo 49 se establece que al declararse rescindido el contrato se devolverá lo amortizado, el precio de venta no tiene nada que hacer en el asunto y lo esencial es mantener el control en la selección de los adquirentes de la tierra. Como consecuencia, al no establecerse el remate sino simplemente el derecho a la rescisión, esa tierra vuelve a poder del consejo nacional agrario, el cual adjudicará el lote dentro de las normas establecidas en el capítulo respectivo.

En consecuencia, en mi opinión —porque no hay tiempo de consultar a la comisión— creo que se podría votar el artículo tal como lo propone el señor diputado, en la seguridad de que no alterará ninguna disposición de la ley, sino que lejos de ello está de acuerdo a las disposiciones esenciales de la misma.

Sr. Labayen. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pita). — La había solicitado antes el señor diputado por la Capital.

Sr. Guillot. — Creo que al señor diputado por Entre Ríos le conviene aplazar su manifestación porque escuchará alguna observación a la cual podrá responder.

Sr. Labayen. — Yo iba a proponer la postergación de este artículo, señor diputado, por-

que hay que analizar esa modificación; sobre todo tratándose de un articulado tan extenso y complejo es necesario ver si desapareciendo la redacción de este artículo tal como lo ha traído la Comisión de Legislación Agraria no hace desaparecer una disposición que luego será una laguna de la ley. Habría que correlacionarlo con un artículo anterior que establece que el consejo agrario, después de pagado el 50 % del precio de compra, ha de proceder a la escrituración de la propiedad. La rescisión del contrato se puede hacer antes de la escrituración, pero a posteriori de la escrituración habría que proceder a la venta del predio. De manera que habría que analizar este artículo con un poco de detenimiento para no decidir así por el análisis muy convincente del señor diputado de que este artículo está de más, o por lo menos, que es contradictorio con el espíritu general de la ley. Por eso pediría a mis colegas de comisión que suspendiésemos la consideración de este artículo hasta la terminación de este capítulo, a efecto de que se pueda dar una opinión certera, para que no tengamos después que arrepentirnos.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Voy a hacer uso, al fin, del derecho que me había concedido la Presidencia.

Si la comisión acepta el aplazamiento del artículo hasta que la Cámara reanude la consideración de la ley, no voy a formular ninguna observación. Me parece prudente lo que sugiere el señor diputado por Entre Ríos, porque aun deseada la proposición del señor diputado por la Capital, este artículo contiene disposiciones que deben ser analizadas. Por lo pronto ya se ha enunciado la distinta situación del propietario antes de que su derecho pase a depender en cierto modo del Banco Hipotecario Nacional y la que existe tanto ser deudor del consejo nacional agrario.

Por mi parte, deseaba, también, preguntar qué debe entenderse por «base total de la deuda»: si son las anualidades atrasadas o el monto del precio que falta cubrir.

Por eso creo que la comisión que se ha demostrado —y le hago justicia— tan permeable a sugerencias de distintos sectores, aceptará este aplazamiento hasta que se reanude la discusión de la ley.

Sr. Horne. — No hay inconveniente, sobre todo que ya vamos a terminar el capítulo, y los demás artículos no tienen relación con éste.

En mi concepto, vuelvo a repetir, se podría votar, pero no está de más el análisis a que se ha referido el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Presidente (Pita). — Corresponde votar la moción de postergación.

—Se llama para formar quórum.

—Obtenido el quórum:

Sr. Presidente (Pita). — El señor diputado por Entre Ríos ha formulado una moción, en el sentido de postergar la consideración del artículo 46 del despacho.

Sr. Horne. — Ya no hay motivo para votar esa proposición, porque la comisión, durante la breve espera, se ha puesto de acuerdo respecto del artículo, en la forma que se ha enviado a la Secretaría.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer.

Sr. Secretario (González Bonorino) — (*Le-yendo*): «Queda facultado el consejo a rescindir el contrato de compra y venta si el comprador no hubiese abonado las anualidades a que se refiere el artículo 29.»

Sr. Palacio. — Debe votarse en esos términos.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—En consideración el artículo 47, ahora 48.

Sr. Saá. — Pido la palabra.

Con el objeto de solicitar un informe de la comisión, porque en este artículo se contempla de manera distinta una situación similar que prevé el artículo 48.

Dice el artículo 47: «En caso de fallecimiento del comprador, el consejo podrá hacer uso del derecho de rescisión, y ceder nuevamente el predio a alguno de los herederos que considere capaz de continuar la explotación agraria, o a un tercero si no hubiera herederos en esas condiciones. En este caso, depositará a la orden del juez y a nombre de la sucesión el monto de las amortizaciones y el valor estimado de las mejoras, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.»

Esto es para el caso de fallecimiento del comprador. Pero el artículo siguiente se refiere al caso de fallecimiento del arrendatario y prevé expresamente que la explotación se dará a la viuda. ¿Por qué ese diferente criterio para uno y otro caso? En el caso de fallecimiento del comprador, indudablemente habría que tener en cuenta que una mujer habituada a las tareas de campo, máxime si se trata de hogares agricultores con numerosos hijos, puede continuar la explotación en la misma forma que si viviera su esposo. Me parece hasta cierto punto

injusto que la viuda pierda el derecho de continuar la explotación.

Sr. Labayen. — Tal vez la comisión ha preferido no emplear los mismos términos, pero ha entendido que la expresión «heredero» se refiere a la viuda, a los hijos; en una palabra, a todos los que sean capaces de ser arrendatarios o compradores del predio.

Sr. Saá. — Así lo había interpretado yo, tal cual lo ha expresado el señor miembro de la comisión; pero me parecía que era necesaria la aclaración. Evidentemente, después de las palabras del señor diputado no hay lugar a dudas.

Sr. Labayen. — Al decir herederos se comprende a todos.

Sr. Presidente (Pita). — ¿El señor diputado por Mendoza, formula alguna indicación?

Sr. Saá. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar el artículo 47, ahora 48.

—Resulta afirmativa.

—Sin observación, se da por aprobado el artículo 48 del despacho, ahora 49.

Sr. Presidente (Pita). — La Presidencia hace presente a la Honorable Cámara que es la hora fijada para considerar el despacho de la Comisión de Legislación General.

Sr. Eyto. — ¿Está ya el despacho en la mesa?

Sr. Presidente (Pita). — No, señor diputado; se está imprimiendo, para su distribución a los señores diputados.

Sr. Pinto (h.). — Hago indicación de que continuemos con el despacho sobre colonización, mientras llega el despacho de la Comisión de Legislación General.

Sr. Presidente (Pita). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento general.

Sr. Presidente (Pita). — En consideración el artículo 49, ahora 50.

—Sin observación, se da por aprobado.

—Se da por aprobado el artículo 50, ahora 51.

Sr. Presidente (Pita). — En consideración el artículo 51 del despacho, ahora 52.

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

Con este artículo la Comisión de Legislación Agraria inicia también una campaña sobre el fondo de la propiedad, en lo que se relaciona

con el régimen urbano y rural, cambiando substancialmente el concepto antiguo sobre los ejidos y las propiedades urbanas.

Bajo nuestras viejas leyes de Indias la organización del régimen comunal correspondía a un concepto completamente distinto. Los pastos comunes, las praderas, los bosques que estaban próximos a las ciudades eran de aprovechamiento de todos. El criterio que ahora introduce la comisión con toda inteligencia y buen sentido importa un concepto nuevo en la legislación agraria, correlacionada con las nuevas exigencias de la explotación contemporánea. En este sentido compruebo que el proyecto complementa con toda inteligencia las ideas de la misma comisión. Ello no me extraña, porque al hacer las observaciones al proyecto en general, tuve la sugestión de un señor diputado por la Capital de que existían antecedentes relativos a esta materia, en Alemania.

—Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Honorable Cámara, don Juan G. Kaiser.

Efectivamente, la comisión estaba perfectamente informada y documentada sobre el particular. El asunto no viene, por cierto, de una época reciente. Ya desde fines del XVIII la legislación comunal contenía disposiciones sobre la materia a fin de propender a la distribución, reintegro, etcétera, de los bienes egidales. Así, en Prusia existió el reglamento del 14 de abril de 1771, que disponía el parcelamiento y aprovechamiento de las tierras comunales. En Silesia, las disposiciones fueron luego trasladadas al derecho rural general de 1811, 1821 y 1850. En Prusia occidental y en Posen, exactamente lo mismo. En Sajonia lo determina una ley del año 1832, 1834 y 1861. En Baviera también se estableció al suprimirse los privilegios de los señores, en el aprovechamiento de las tierras que estaban dentro de los ejidos en 1852. Wurtemberg lo ha tenido en su organización desde 1873. Austria también lo aceptó por la ley del 7 de junio de 1873. Pero lo más interesante es que esta ley, tanto en este aspecto como en el agrario general, coincide con el de la legislación alemana de 1919 y de 1933, bajo la inspiración de hombres y de gobiernos que no coinciden con la orientación democrática del nuestro.

No obstante estas observaciones, creo que es imprescindible que la subdivisión de las tierras en los ejidos se realicen con un cierto intervencionismo de Estado, no obstante que la regulación económica natural contribuye ampliamente a ello.

Por estas razones, voy a votar el artículo propuesto, y en los límites de mi voto expresado al discutirse en general.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

—Se dan por aprobados los artículos 51 y 52 del despacho, ahora 52 y 53, respectivamente.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia desea hacer presente a la Honorable Cámara que los señores ministros del Interior y de Agricultura desde hace largo rato se encuentran en la casa, pues la Cámara había resuelto tratar el despacho de la Comisión de Legislación General, relacionado con los precios de los artículos de primera necesidad.

Sr. Maino. — Hago indicación de que la Cámara pase de inmediato a tratar ese despacho.

Sr. Susan. — ¿Si me permite la Presidencia...?

Yo deseo proponer un artículo nuevo que se refiere a los tamberos, trabajadores del campo, numerosos, con grandes capitales, que expenden un producto de absoluta necesidad, para el consumo público.

He expresado que, como los campos que ellos deben utilizar son generalmente de un valor subido y poco accesibles a sus capitales y a sus posibilidades, y como por el hecho mismo de que esos campos rinden buen arriendo los propietarios no los van a dar a la expropiación para que sean colonizados, creía que era muy conveniente incluir en la ley una disposición concreta en el sentido de que pudieran expropiarse en todo momento para destinarlos a ese objeto.

No voy a repetir los argumentos que he dado, que creo suficiente, tanto más cuanto que el miembro informante de la comisión expresó que no aceptaba el agregado porque no cuadraba dentro del artículo en discusión en ese momento, pero que aceptaba la idea para cuando se tratase el artículo 15 del despacho Respaldado por esa manifestación, pido que el agregado que propongo y he entregado a la Secretaría, sea votado.

Sr. Presidente (Kaiser). — ¿Como artículo nuevo?

Sr. Susan. — Sí, señor presidente.

Sr. Horne. — La comisión, recogiendo la proposición hecha en sesiones anteriores por el señor diputado por Santa Fe, propone un artículo nuevo, que sería el número 54 de este capítulo, que tiende a resolver el problema de la subdivisión de tierras en lotes para la formación de colonias de tamberos en lugares cercanos a las ciudades.

Pido que el artículo nuevo propuesto por la comisión, se lea por Secretaría.

Sr. Secretario (González Bonorino). — El artículo nuevo, propuesto por la comisión, es el siguiente: «Artículo 54. — En tierras cercanas a las ciudades el consejo propenderá especialmente a la formación de colonias de tamberos, con la organización establecida en la presente ley».

Sr. Susan. — El artículo que propongo es más amplio, pues establece: «Cuando un número suficiente de interesados lo solicite a objeto de instalar tambos, la comisión podrá declarar de utilidad pública un campo que reúna las condiciones indicadas en la ley, aconsejando al Poder Ejecutivo su expropiación».

Sr. Horne. — ¿Si me permite el señor diputado...?

Esa parte no es necesaria porque la ley contempla en disposiciones especiales la forma en que se compra la tierra y se la puede expropiar. En consecuencia, la norma general y el concepto es el que ha expresado el señor diputado.

Sr. Susan. — Perfectamente, señor diputado; acepto la aclaración.

—Ocupan sus asientos, los señores ministros: del Interior, doctor Eugenio Taborda, y de Agricultura, ingeniero José Padilla.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo nuevo, propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a considerar el despacho de la Comisión de Legislación General.

10

REPRESION DEL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación General, en mayoría, ha estudiado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y las iniciativas presentadas por los señores diputados Juan E. Solá; Francisco F. Eyto y otros; Rodolfo Reyna, Pío Pandolfo y otros; y Juan A. Solari y otros, estableciendo medidas tendientes a impedir la elevación injustificada de precios con motivo de la situación de emergencia consiguiente a la guerra declarada en algunos Estados de Europa; y, por las razones que expresará el miembro informante, os aconseja su sanción en la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — A partir de la promulgación de la presente ley, establécense como precios máximos de venta al consumidor de los artículos de alimentación, vestidos, vivienda, alumbrado, calefacción y sanidad, el promedio de los precios vigentes, en cada región, durante la primera quincena del mes de agosto de 1939, el que será fijado por el Poder Ejecutivo.

Art. 2º — El Poder Ejecutivo determinará, dentro de los diez días de la promulgación de la presente ley, los productos que deberán quedar comprendidos dentro del enunciado del artículo 1º, sin perjuicio de ampliar su enumeración a otros que afecten la vida y el trabajo nacional.

Art. 3º — Autorízase al Poder Ejecutivo para fijar periódicamente, para cada región del país, los precios máximos de los productos comprendidos en los artículos 1º y 2º.

Art. 4º — En todos los locales afectados a la venta de las mercaderías y productos mencionados en los artículos 1º y 2º, los precios deberán ser anunciados por planillas oficiales, bien legibles y visibles, colocados en las vitrinas o entradas del local y también en el interior.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo determinará los precios máximos a que deberán sujetarse los fabricantes, intermediarios, importadores y mayoristas en sus ventas a los comerciantes al por menor.

Art. 6º — Para asegurar el cumplimiento de esta ley y desde la fecha de su promulgación, todo empresario, introductor, productor, comerciante mayorista o minorista y toda persona o entidad que por cualquier causa o título tenga en su poder artículos comprendidos en esta ley y que no sean destinados al consumo propio, están obligados a comunicar al Ministerio de Agricultura, en la forma y plazo que determine el Poder Ejecutivo, la existencia en su poder de los referidos artículos, a los efectos de la verificación de la existencia y cantidad de tales productos cuando la autoridad lo estime necesario.

Art. 7º — El Poder Ejecutivo queda facultado para crear registros de las personas o entidades enumeradas en el artículo anterior; establecer y controlar existencias; comprobar orígenes y costos; disponer registros y allanamientos y ejercitar todos los recursos que aseguren el cumplimiento de la presente ley.

Art. 8º — Toda infracción a los precios máximos que fije el Poder Ejecutivo a los productos o mercaderías, o todo acto que comporte alterarlos, ya sea acaparando, restringiendo, ocultando, negándose a transportar o vender, y cualquier otro hecho que concurra a producir una elevación artificiosa de aquellos precios, será reprimido con multa de \$ 200 a \$ 100.000 m/n. o en su defecto prisión de un mes a seis años. En caso de reincidencia, se aplicarán conjuntamente ambas penas.

Art. 9º — Sin perjuicio de las penalidades del artículo anterior, el Poder Ejecutivo podrá disponer la clausura definitiva o temporaria de los locales donde se cometa la infracción y el secuestro de la mercadería.

Art. 10. — Las personas que no dieran cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º, serán reprimidas con multa de \$ 100 a \$ 10.000 m/n., o en su defecto con prisión de un mes a tres años.

Art. 11. — Cuando los que violen esta ley sean sociedades comerciales o personas jurídicas, los directores, administradores, gerentes o miembros de la razón social